

LOS CAÑONES DE FRAGA

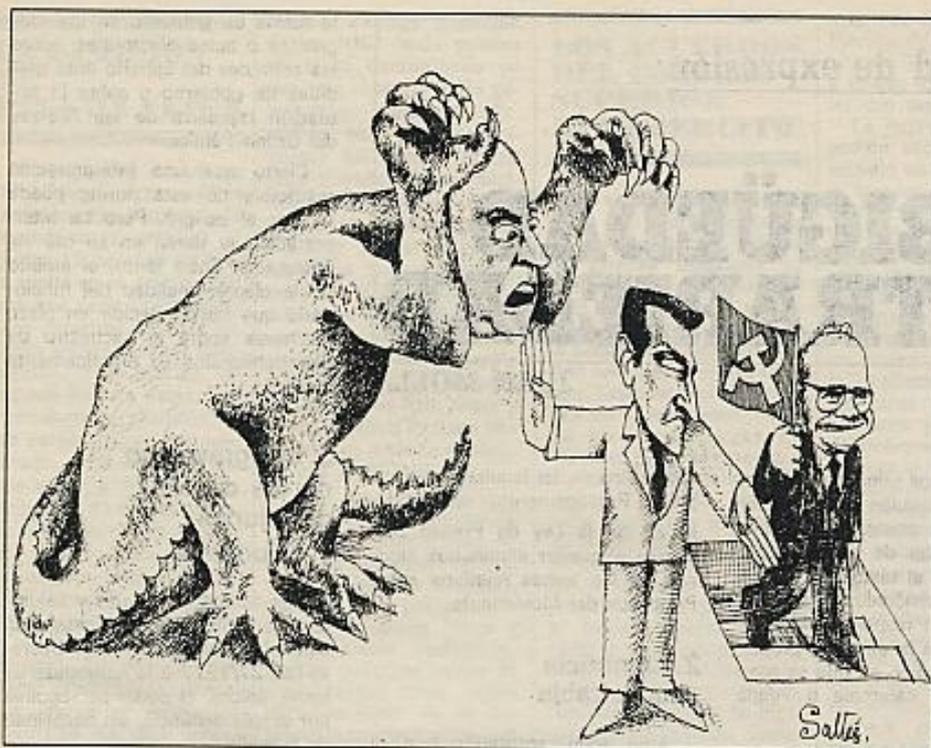
EL primer cañonazo de la crisis lo lanzó Fraga Iribarne: "Es un golpe de Estado". La legalización del Partido Comunista de España quedaba denunciada como un acto contrario a la legalidad. "Me parece un grave error político y una farsa jurídica (...). Puede afirmarse que la legalización del Partido Comunista es un verdadero golpe de Estado, que ha transformado la reforma en ruptura y que ha quebrado a la vez la legalidad y la legitimidad". Desde "ABC", órgano ya de Alianza Popular y expresión de la extrema derecha parlamentaria, se desarrollaba inmediatamente la tesis de la situación de ilegalidad. Y se produjo entonces lo que se ha llamado, y se llama aún, la "crisis militar". Esta vez, abiertamente, con una reunión de los más altos mandos y un comunicado que después de varios avatares y transformaciones por los interesados en tergiversarlo se hizo público. La situación podía revestir una gravedad extrema. Los militares están repitiendo continuamente, con toda insistencia desde la muerte de Franco, que son apolíticos, que son neutrales en todo aquello que no suponga una amenaza interior o exterior para España y para su unidad. Su misión es defender la legalidad: esto es, el ejercicio de un régimen civil producto de unas leyes hábiles, válidas. Pero si esa legalidad se considera transgredida, si se acepta la ruptura como consumada, si puede hablarse de "golpe de Estado", su impasibilidad puede romperse. El texto del comunicado del Consejo Superior del Ejército, que destruía versiones previas que iban desde una disminución de sus términos hasta una exageración, según la tendencia de quien lo comentase, es bastante explícito. Hay unanimidad en el Consejo, y éste expresa la "repulsa general de todas las unidades del Ejército" por la legalización del PC, y si la admite es "en consideración a intereses nacionales de orden superior", "disciplinadamente": la admite como "un hecho consumado" y recuerda cuál es la actitud que podría considerarse como profesional y política: "defender la unidad de la Patria, su bandera, la integridad de las instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas". Todos sabemos leer bien

estas líneas, y el presidente Suárez el primero. Y el propio Partido Comunista, que no había sabido contener su júbilo por la legalización. El PC en esta última etapa, en estos últimos años, está dando prueba de una moderación textual y programática considerable, de un afán de compromiso y de legalización que, según sus críticos de la izquierda, le están llevando a desnaturalizarse. Pero es incapaz de resistir a su afán de protagonismo. Es un defecto congénito que no ha sabido corregir. Las manifestaciones del sábado y el domingo de la semana anterior, los coches con la bandera roja por el centro de las calles de Madrid, el festejo, repitamos, triunfalista por una legalización que los otros partidos han llevado más discretamente cuando les ha correspondido, significaba para muchos una provocación. Tenemos noticias de que en algunos puntos el "servicio de orden" del partido ha tratado de contener a los manifestantes, a sus propios militan-

tes. Debe saber la importancia simbólica que la derecha concede a este partido y a sus dirigentes. Debe saber también que la gran derecha tiene un motor que la lleva a cualquier acción: el miedo.

LO debe saber también el presidente Suárez, que está instalado en la derecha y vive en ella y entre ella desde hace muchos años. La derecha es irreductible, y en un momento dado en que se siente vulnerada no atiende a la razón. La razón evidente desde un punto de vista político y realista es que la opción democrática en España está jugada y es la salida lógica a la situación económica, social y política del país para correr una suerte paralela a su contexto geográfico o geopolítico, como diría Hitler. Y que el camino hacia la democracia, por muy contenida y muy conservadora que quiera ser, por muchos resortes de seguridad y de autoridad que tenga, pasa por la legalización





de los partidos políticos, y concretamente del Partido Comunista. La forma en que ha jugado Suárez esta baza a la que está forzado ha sido realmente catastrófica, con su invento del Tribunal Supremo y con su legalización-sorpresa en un Sábado Santo con Madrid vacío. La derecha se ha sentido engañada.

Y ha coincidido con un temor de Alianza Popular a perder las elecciones. Esto es, a no ganar: porque indudablemente conseguirá una buena proporción en las Cortes, pero no podrá gobernar. Al menos con los cálculos que se hace ahora. No es a la izquierda a quien teme el grupo de Alianza Popular: la izquierda, desnuda y maltrata, sin acceso a ninguna forma de presión electoral, puede tener pocos diputados, aunque sean ruidosos. Hay pronósticos más favorables a la izquierda, pero en estos momentos, a dos meses de la fecha electoral fijada en el último Consejo de Ministros, no parece que vaya a tener una mayoría importante. Todo depende de lo que pase de aquí a entonces, y puede pasar de todo.

PARA Alianza Popular el juego duro y la utilización del momento se imponía. Si la acusación contra Suárez hubiera prevalecido y la hubieran considerado como válida altos estamentos —y poderosos— de la nación, su dimisión se imponía. Y dentro de la legalidad vigente, sin ninguna extorsión a las leyes antiguas y modernas, podía haber sido encargado de formar Gobierno Fraga o González de la Mora: o un nombre menos visible, pero tan comprometido como cualquiera de ellos. Pro-

bablemente ese nuevo Gobierno hubiera tenido que sostener ya la legalización del PC. Pero podía haber pospuesto las elecciones generales, podía haber tomado una serie de medidas de orden público, podía haber emitido una serie de Decretos-Leyes contrarios al espíritu de los actuales. Podía haberse apoyado, sobre todo, en unas Cortes donde todavía tiene una mayoría importante, una mayoría que si se recorta o desaparece en muchos momentos decisivos o que parecen decisivos es porque tiene todavía un reflejo de obediencia al poder constituido. Pero con un Gobierno conservador estas Cortes podrían ser un instrumento absolutamente regresivo.

EL riesgo no ha pasado. Está perfectamente actual. Los intentos de convocar un Pleno extraordinario de las Cortes para estudiar la legalidad de la legalización del PC están en marcha: se puede conseguir. Si el Gobierno se viera así derrotado por un Pleno, sean cuales sean sus maniobras de defensa o sus capacidades de presión, se vería en una situación difícil. Con un Ejército que acepta la política actual por disciplina y por evitar males mayores, con un Tribunal Supremo profundamente disgustado y con unas Cortes adversas, el presidente Suárez, que se ha apoyado precisamente en esas instituciones y no en una mayoría democrática del país, se vería forzado a dimitir. El presidente no da sensación de inseguridad: mantiene su viaje a México y Estados Unidos, como el Jefe del Estado mantiene el suyo a la República Federal de Alemania. El poder está seguro de que nadie va a intentar nada extraordinario contra él: está garantizado. Pero esa

seguridad, que es lógica, no puede mantenerse ante un reverso surgido de una situación legal que él mismo ha respetado y mantenido. Con la dimisión de Suárez volveríamos a pensar en el ciclo antes descrito: un Gobierno Fraga y una situación de reserva y de vigilancia. Puede suceder en cualquier momento.

PORQUE aun sin acontecimientos de carácter extraordinario, deben suceder otros que son ya inevitables, y que van a excitar —o a mantener la excitación— de la extrema derecha. Va a regresar Dolores Ibarruri, "La Pasionaria"; van a celebrarse mítines del PC. La televisión y la radio tienen la obligación de conceder su espacio a todos los partidos electorales: y se va a ver en la pantalla a Carrillo y Dolores Ibarruri sin remisión, a menos que el PC decida cambiar de dirigentes, lo cual no parece probable en estos momentos (las noticias en ese sentido fueron desmentidas por el "pleno ampliado" del partido). Estos dos mismos personajes que siendo actuales tienen un largo arrastre histórico —no mayor que el que tienen las grandes figuras de la derecha, en sentido contrario—, van a salir elegidos diputados, por pocos escaños que consiga el PC en las elecciones. Y van a hablar en el Parlamento. Por otra parte, el Gobierno se va a ver forzado a reconocer a los otros partidos que se definen siempre como "a la izquierda del PC": no hay razón válida para que su legalización no se consuma, y Suárez podría haberlo hecho todo de un solo golpe, era evitarse el viacrucis que se le viene encima.

TODO esto son heridas continuas a la derecha, exacerbación de su inquietud. Todo ello va a ser más miedo para su miedo. Y más necesidad de que la situación que progresa en contra suya, y que puede consumarse en las elecciones con una victoria del "centro" que va a sostener a Suárez y va a estar sostenido por él, les arroje para siempre del paraíso del poder.

LOS próximos dos meses van a ser muy duros. Para el Gobierno y para los partidos demócratas. La gran derecha va a ver mermadas sus posibilidades electorales (y se han mermado más con su intransigencia para la situación política actual, que ha quitado las máscaras demócratas de Alianza Popular) y va a continuar su campaña más allá de lo puramente parlamentario. El porvenir del país depende casi enteramente de estos meses (en lo inmediato: en los históricos o más lejano la democratización es irreversible).